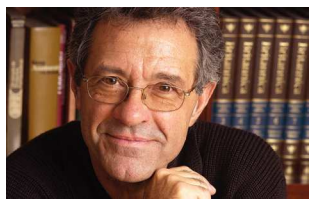
Editorial

La última semana de noviembre de 2004, el Ministerio de Sanidad y Consumo facilitó el documento del Plan Estratégico sobre Política Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Se trata de un conjunto de buenas intenciones destinado a conseguir el uso racional de los medicamentos, que por lo que concierne a las oficinas de farmacia supone un ataque en toda regla a su línea de flotación. Para «fomentar la calidad en la prestación farmacéutica» y «el uso racional de los medicamentos» se propugna una serie de medidas que perjudican gravemente la economía de las farmacias: una reducción del margen de la distribución de dos puntos, disminuir el margen comercial de las farmacias cuando dispensan medicamentos genéricos, reducir el precio de las especialidades farmacéuticas en un 6%. Incluso las medidas que en efecto pueden contribuir a una racionalización del consumo serán perjudiciales para la economía de las farmacias, como la dispensación por unidades y no por formatos comerciales.

En suma, la sostenibilidad del gasto público en medicamentos vuelve a recaer sobre los farmacéuticos y se renuncia a otras medidas, como sería dedicar más dinero a la prestación farmacéutica o aumentar el copago, que en España es, junto con Luxemburgo, el más bajo de Europa. No se emprende ninguna medida estructural y se sigue fomentando, más allá de las apariencias, que los médicos prescriban los medicamentos más recientes, novedosos y caros, incluso en los casos —que son muchos— en que la ventaja terapéutica es más que discutible. Y mientras todo esto sucede, sigue aumentando el número de farmacias establecidas, tras complejos y kafkianos procedimientos administrativos, para que al final, tras años de esfuerzos e inversiones millonarias, el farmacéutico concluya que se ha acabado convirtiendo en un apéndice de la Administración sanitaria.

Las repercusiones de estas medidas pueden ser muy graves a medio plazo: un enfoque más comercial de las farmacias en detrimento de los componentes asistenciales, buscar beneficios al margen de la dispensación de medicamentos, renunciar al desarrollo de los programas de atención farmacéutica, por los que no se percibe remuneración alguna, e incluso empezar a dudar de las ventajas de una planificación que, tal y como está siendo efectuada, resulta muchas veces más perniciosa que benéfica. Quizá la estrategia consista precisamente en esto, en llegar a un punto sin retorno en el que las farmacias, tras haber sido las cenicientas del sistema sanitario, sean finalmente segregadas de él y entregadas a las leyes del mercado. ■